

El COVID 19 desnuda la miseria del capitalismo y las políticas neoliberales de los gobiernos

Por Resocal



Al momento de escribir este artículo, el número de contagiados por Covid-19 son un total de 800.275 casos que han sido registrados en América Latina y el Caribe. Brasil es el país más afectado por esta pandemia en la región, con más de 391 mil casos confirmados. Perú se ubica en segundo lugar, con más de 129 mil infectados. Chile, por su parte, ha registrado un total de 77,96 mil casos. En Colombia es de casi 17.000, con más de 600 muertos y apenas un 24% de recuperados [2]. Dentro de los países más afectados por el nuevo tipo de coronavirus en América Latina también se encuentran Ecuador, México, Panamá, República Dominicana.

En otros países latinoamericanos, la alta informalidad y desigualdad social, la dependencia de la exportación de materias primas, en particular del petróleo (cuyo precio ha caído estrepitosamente) están provocando un escenario dramático. Esto se ve agravado por las políticas reaccionarias y antisociales de gobiernos ultraderechista y proimperialista como lo son los de Duque en Colombia, Piñera en Chile, Bolsonaro en Brasil, Martín Vizcarra en el Perú, Jeanine Añez en Bolivia etc.

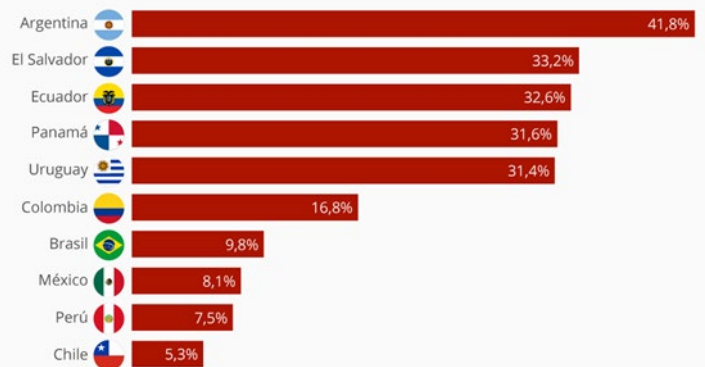
El Banco Mundial informaba recientemente que América Latina sufrirá una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de al menos 5.2%, Esta caída, con seguridad, será mayor viendo el desplome que están sufriendo economías más poderosas como EE. UU., China o la UE, decisivas para las exportaciones latinoamericanas.

Ante esta realidad, América latina es una bomba a punto de explotar, según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Argentina es el país de la región con el mayor porcentaje de deuda externa en relación con su producto interno bruto (PIB). El monto adeudado por el Estado argentino a acreedores externos representaba alrededor del 42% del PIB en 2018, mientras que, en Brasil, México y Chile, este porcentaje era inferior al

10%. Los gobiernos proimperialista han demostrado que intentaran contener el caos con represión, dispuesto hacer lo que sea para defender los intereses de la burguesía.

La deuda externa en América Latina

Deuda externa como porcentaje del PIB en países seleccionados en 2018



Basado en el total de pasivos que el gobierno central de cada país le debe a acreedores externos. Fuente: CEPAL

En Colombia levantan la cuarentena respondiendo a los intereses capitalistas

Siguiendo el ejemplo de Trump y Bolsonaro, Duque anunciaba que el 27 de abril se reiniciaban actividades laborales en 35 sectores de la economía, principalmente la manufactura y la construcción, sin dar ninguna explicación respecto a cómo mantener los protocolos de bioseguridad.

Los trabajadores recibieron la noticia con preocupación y rabia. Obligados a ir al trabajo para no ser despedidos, mientras arriesgan sus vidas y las de sus familias. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, dejaba ver en sus declaraciones que los protocolos de arranque no estaban todavía definidos y quedan en manos de los empresarios.

La respuesta de Chile ante el Coronavirus



En Chile, la pandemia nos encontró en un momento social complejo, después de un estallido social que había reventado la burbuja del "oasis de Latinoamérica", con una ciudadanía movilizada, autoridades con niveles bajísimos de aprobación y un proceso constituyente en marcha, que tendría como hito relevante el plebiscito del 26 de abril de 2020. Frente a este escenario y comprendiendo la gravedad de la amenaza sanitaria, como Colegio Médico

manifestamos desde el día uno nuestra disposición a trabajar en conjunto para enfrentar esta crisis y solicitamos insistentemente al gobierno la participación más directa de expertos con experiencia en pandemias, entendiendo la importancia de que las decisiones políticas contaran con un respaldo técnico que diera confianza a la ciudadanía y generaran consenso en la comunidad médica y científica. Esto era de gran relevancia, considerando que, de acuerdo con la experiencia internacional, nuestro país iba a tener que empezar a tomar medidas cada vez más restrictivas, que para muchos podían ser vistas como una manera de acallar el movimiento social. Lamentablemente, esta solicitud tardó en tener eco.

Bolivia la derecha usa la misma retórica



Los bolivianos estaban llamados este 3 de mayo a las urnas para poner fin a la crisis desencadenada por las tumultuosas elecciones generales del pasado octubre. Pero llegó el coronavirus y obligó a aplazar la fecha. La política de mano dura, implementada por Añez desde que asumió la presidencia interina, ha sido objeto de fuerte crítica dentro y fuera del país. "La retórica que atenta contra los derechos humanos no es un fenómeno nuevo en Bolivia", dice Fernanda Doz Costa, directora adjunta para las Américas en Amnistía Internacional. Pero asegura que "se han observado señales preocupantes del nuevo gobierno como acusaciones infundadas de sedición y subversión contra periodistas y miembros de la Asamblea Legislativa" – órgano de mayoría socialista. Los masistas acusan al gobierno transitorio de persecución política y sienten que la opresión se ha intensificado con la llegada del coronavirus. Desde que se decretó la cuarentena denuncian represión selectiva de opositores. Señalan allanamientos y detenciones arbitrarias, obstaculizaciones de entregas humanitarias a municipios controlados por sindicatos cocaleros y atentados contra la libertad de expresión. Desde el exilio, Evo Morales, acusa a Añez de usar la pandemia para aferrarse al poder. "El coronavirus llegó como anillo al dedo a la derecha para que pueda postergar (las elecciones)", dijo el exmandatario a AFP.

Perú legaliza la impunidad



En medio de la grave crisis por la pandemia del coronavirus se metió el viejo virus de la mano dura y del autoritarismo. Hace unos días, con el país militarizado para controlar la cuarentena general y las garantías suspendidas por el estado de emergencia, se promulgó una ley de gatillo fácil. La norma tiene carácter permanente, no se limita al actual estado de emergencia y, exime de responsabilidad a los miembros de las fuerzas de seguridad que utilicen sus armas contra la población "en cumplimiento de sus funciones". Los uniformados no podrán ser detenidos si matan o hieren a alguien, y no se exige que haya proporcionalidad en su respuesta. Es decir, quedan en libertad de disparar contra una persona desarmada. Esta ley fue promulgada por el nuevo Congreso unicameral, que entró en funciones hace unos días. Un mal, y preocupante, debut. Desde el gobierno han optado por minimizar la gravedad y los riesgos de esta ley. En cambio, han redoblado su respaldo a las fuerzas armadas y a la policía, ahora empoderadas por el discurso oficial en medio del estado de excepción y el temor por el Covid-19. Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos exigen su derogatoria.

El origen de la ley de gatillo fácil viene del anterior Congreso, disuelto constitucionalmente en septiembre pasado por el presidente Martín Vizcarra. Era un cuerpo dominado por la extrema derecha fujimorista y sus aliados, que la aprobaron con el clásico discurso de la mano dura contra la delincuencia y pensando también en proteger la represión contra las protestas sociales. El Ejecutivo no promulgó la ley en ese momento, pero tampoco la había observado cuando el Congreso fue cerrado. El asunto quedó en el limbo. A pesar de estos dimes y diretes, que algunos medios Ayayeros intentan presentar como una cara "amable" y "progresista" dentro de los políticos burgueses latinoamericanos coincide con lo de anteponer los beneficios capitalistas a la vida y salud del pueblo.

Los préstamos asumidos con el FMI son para desangrar al pueblo trabajador en beneficio de la oligarquía



EL FMI PRESTA 3.483 MILLONES DE DÓLARES A 11 PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

El Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó préstamos por 3.483 millones de dólares a 11 de los 17 países de América Latina y el Caribe que le han solicitado créditos para enfrentar la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus. De acuerdo con el reporte más reciente del organismo, entre el 15 de abril y el 1 de mayo fueron aprobados préstamos a Bolivia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Haití, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Santa Lucía. El menor monto correspondió a Dominica, con 14 millones de dólares, mientras que el más alto, de 650 millones de dólares, fue para República Dominicana, pero las líneas de crédito permanecen abiertas porque hay otros países que las han solicitado. La crisis del Covid-19 está siendo un excelente negocio para el capital financiero, que estará manejando fondos de hasta 3.483 millones de dólares, mientras el pueblo paga los platos rotos con muerte, hambre y miseria.

¿Salvar a las aerolíneas? Una pregunta incómoda en Latinoamérica



Mientras en países de Europa y en Estados Unidos los gobiernos están asistiendo a las aerolíneas en crisis, en Latinoamérica la ayuda no ha sido tan contundente. Si bien los recursos son limitados y hay muchos otros sectores necesitados, el aéreo es el medio de transporte que conecta a la región.

Un ejemplo de esto de como se está cargando la crisis sobre los trabajadores y al pueblo es la paralización generada por el coronavirus fue la que le dio la estocada final a una segunda aerolínea latinoamericana. Se trata de la ecuatoriana TAME, que será liquidada por el gobierno de Lenín Moreno. Como en el caso de Avianca, que se declaró en quiebra el 10 de mayo, los problemas de TAME no son nuevos. La aerolínea estatal acumuló pérdidas por más de US\$400 millones en 5 años. Con la pandemia, TAME pasó a integrar la lista de las compañías que desaparecerán en Ecuador, en medio del esfuerzo por reducir el tamaño del Estado y ajustar las cuentas en ese país.



Avianca Holdings, la segunda aerolínea más grande de América Latina y una de las más antiguas del mundo, solicitó acogerse al Capítulo 11 de la ley de bancarrota de Estados Unidos. Su objetivo es presentar un plan de reorganización -que debe ser aceptado por Tribunal en Nueva York y por los acreedores- sin tener que suspender sus operaciones. Aunque la empresa ha manifestado que su objetivo es conservar empleos, en Perú ya anunció el cierre de sus operaciones para reducir costos, lo que se traduce en el despido de cientos de empleados. Avianca había estado en la cuerda floja antes del coronavirus las deudas de Avianca en 2019 superaban los US\$7.000 millones. A finales del año pasado, Avianca completó con éxito una reestructuración basada en el intercambio de bonos que vencían en 2020 por unos nuevos con vencimiento al 2023. La aceptación del aplazamiento de la deuda fue esencial para acordar un financiamiento de US\$250 millones por parte de United Airlines y Kingsland (accionista minoritario que administra Avianca por mandato de United). Latam, la compañía aérea más grande de América Latina se ha declarado en quiebra este martes en Estados Unidos, debido a la drástica caída de la actividad causada por la pandemia de coronavirus, ha anunciado la empresa en un comunicado.

"El 26 de mayo de 2020, Latam Airlines Group se presentó para reorganizarse bajo la protección del Capítulo 11" de la ley de quiebras de Estados Unidos, indica el comunicado de Latam. La decisión de la compañía, que incluye a las filiales en Chile, Perú, Ecuador y Colombia, no tendrá un impacto inmediato en los vuelos de pasajeros o de carga, aclara el comunicado.

Antes de la pandemia, Latam volaba a 145 destinos en 26 países y efectuaba alrededor de 1.400 vuelos diarios. "Dado el impacto que la crisis generada por la Covid-19 ha tenido en la industria de la aviación, Latam se ha visto obligada a tomar una serie de decisiones extremadamente difíciles en los últimos meses", ha dicho Roberto Alvo, director ejecutivo de LATAM en un vídeo. "Latam Airlines Group y sus filiales en Chile, Perú, Ecuador y Colombia entraron en una reorganización voluntaria bajo la protección del Capítulo 11 en los Estados Unidos", afirma. Las filiales de LATAM en Argentina, Brasil y Paraguay no están incluidas en la solicitud.



Los de AVIANCA, TAME y Ahora LATAM son ejemplos muy disímiles, dado el tamaño, composición y relevancia de cada empresa. Sin embargo, en estos casos se reflejan las dificultades de las aerolíneas de la región antes del coronavirus, con abultadas deudas y elevados costos operacionales y con grandes cargos sobre sus trabajadores sancionados y más de la mitad de ellos despedidos.

Incógnitas y desafíos para los sistemas de salud en América Latina



Podríamos decir que no existe en este momento en ningún país latinoamericano (exceptuando a Cuba, y Venezuela) un consenso con relación a cuál debe ser el papel del Estado y su función en los aspectos

sociales y económicos. De hecho, existen dos posiciones contrapuestas: el Modelo de Estado Social o Estado de Bienestar y el Modelo de Estado Neoliberal.



La concepción del Estado de Bienestar propone que es indispensable en democracia, garantizar los derechos políticos y sociales. La idea central de este concepto es que la población no puede hacer reales sus derechos políticos sino van acompañados de condiciones mínimas de existencia.

De esta manera, el Estado de Bienestar tiene la obligación de garantizar un grado básico de igualdad a través de la intervención gubernamental en áreas tales como: distribución justa del ingreso, acceso a los servicios (salud, educación), garantizar la obtención de empleo y salarios mínimos entre otras.

La Política social del Estado de Bienestar se basa en una idea colectivista del bienestar, es decir, no puede dejarse en manos de la suerte individual. Se convierte en un distribuidor de recursos hacia la sociedad, a partir de la riqueza producida en el país y por entes privados a través de la tributación.

Al asumir su función distribuidora regula la actividad del mercado tanto estructural como coyunturalmente. Lo hace con base a la justificación de que la dinámica propia del mercado no siempre favorece a los intereses sociales ni la justicia.

Esto genera la eliminación de las fronteras entre lo político y lo económico, ya que lo político determina las decisiones de tipo económico. No solo actúa como ente regulador, sino que forma parte activa en la prestación de algunos servicios.

El neoliberalismo retoma los principios del liberalismo clásico y considera que la principal garantía que debe proteger el sistema político es la libertad del ciudadano. La intervención del Estado debe ser mínima, garante de la propiedad privada y de la libertad de contratos lo que constituye la base de la sociedad capitalista. El Estado debe hacer pocas leyes y sencillas, se dedicará a actividades tales como: garantizar la seguridad de los ciudadanos y administrar justicia, elementos indispensables para que las personas, mediante su propia iniciativa puedan lograr su bienestar. Es decir, el crecimiento económico y el bienestar social será el resultado de dejar libres a los

ciudadanos para que en el alcance de sus propios intereses lleven al desarrollo a toda la sociedad. Dentro de esta concepción de Estado, las fuerzas del mercado deciden la asignación de recursos y la libre competencia de los privados permitirá un aumento en la producción, la productividad y la calidad de los bienes y servicios.



Los trabajadores y el pueblo enfrentan la agresión del estado y gobierno

Falta de camas en los hospitales, saturación de las Unidades de Cuidados Intensivos, millones de trabajadores sin seguro social, pérdida de empleos y hambre durante la cuarentena: mientras el coronavirus avanza en el mundo, cada vez más voces se suman a la crítica contra las políticas de ajuste.

ejemplo es el sector salud. Como en todo el mundo, los trabajadores sanitarios están en primera línea del combate contra la pandemia y sufriendo duramente sus consecuencias. Cientos de ellos han salido a protestar en todos los países por la falta de insumos de bioseguridad, que deben brindar las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL). Igualmente, no se les están formalizando sus relaciones laborales o contratos a término indefinido, ni otorgando las nivelaciones salariales.

Esta brutal agresión exige una respuesta inmediata de los sindicatos del sector y del conjunto de la clase obrera. Los dirigentes de los sindicatos y de la izquierda deben impulsar la organización y extensión de estas movilizaciones y preparar una lucha decidida por la nacionalización de todo el sistema sanitario bajo control directo de los trabajadores.

La crisis, y el malestar que implica, hace que la población proteste con más fuerza cada día. En muchas regiones, municipios y poblados los más pobres han salido a protestar, haciendo cacerolazos y cerrando vías exigiendo que se cumplan las promesas de suministros de alimentos y bonos económicos anunciados por los gobiernos. En los balcones de muchas casas y apartamentos se han colgado trapos rojos en señal de auxilio y denunciando que no tenían recursos para soportar la cuarentena.

La izquierda debe replantearse la lucha



La crisis del Covid-19 comenzó en medio del proceso de cuestionamiento creciente a la clase dominante iniciado con el paro nacional del 21 de noviembre de 2019. El levantamiento de los jóvenes y trabajadores colombianos coincidió con las inspiradoras insurrecciones sociales en otros países latinoamericanos como Chile y Ecuador, la resistencia contra el golpe en Bolivia y levantamientos revolucionarios en otras zonas del planeta: Argelia, Irán, etc.

Desde Izquierda Revolucionaria, consideramos que es un error paralizar la lucha en este momento. Los Comités Nacionales del Paro al aceptar establecer mesas de diálogo con los gobiernos, que -como era de esperar- han terminado siendo saboteadas por éstos, ha permitido un debilitamiento temporal del movimiento social.



Sin embargo, las condiciones objetivas que explicaron el estallido del pasado noviembre se mantienen y están agudizando con la pandemia. El movimiento espontáneo de trabajadores de la economía sumergida, que se han concentrado en plazas y barrios, llegando a cortar autopistas troncales, en Ciudades importantes en América latina y el caribe pidiendo ayudas sociales y reivindicando el impago de los servicios públicos y los alquileres, son prueba de ello.

El movimiento espontaneo social se ha pronunciado contra un desconfinamiento prematuro para garantizar el beneficio de los grandes capitalistas y criticó que la cuarentena, tal como la aplican los gobiernos

neoliberales, condenaba al hambre a millones de personas. Pero esto es completamente insuficiente si no se pasa de las palabras a los hechos. La izquierda debe confiar en la fuerza del pueblo trabajador, campesino y pobre. Así como acordó en la última cumbre de los pueblos 2019 donde se impulsaron acciones de protestas desde todos los puntos posibles, como por ejemplo desde las casas haciendo cacerolazos, pitazos y la colocación de trapos rojos en los balcones, es necesario definir ya un programa y un plan de lucha que movilice a las masas para acabar con los gobiernos neoliberales de la miseria y pobreza los que representan el capitalismo internacional.

Por un plan de lucha y un programa socialista para enfrentar la crisis



Los activistas y luchadores obreros, estudiantiles y populares más a la izquierda deben organizarse para levantar este programa y plan de lucha, preparando las tácticas para después del confinamiento impulsar de nuevo la movilización de masas mediante acciones desde las bases y exigiendo al mismo tiempo a las direcciones de los sindicatos continuar la lucha iniciada con la huelga general de noviembre hasta culminar en una huelga indefinida, como exigían las bases en ese momento, que acabe con los gobiernos reaccionarios.

A esto hay que unir el establecimiento de asambleas populares y comités de acción que organicen democráticamente la autodefensa frente a la represión del estado y los paramilitares de ultraderecha y el desarrollo de la movilización en las ciudades y localidades de todo el territorio latinoamericano, y que se coordinen a nivel estatal para aplicar un programa que unifique a todos los sectores:

- Nacionalización de las clínicas privadas, creando un sistema nacional de la salud bajo gestión directa de los trabajadores.
- Expropiación de los grandes latifundios, nacionalización de la tierra y reparto entre los campesinos pobres.

- Fin de todas las contrarreformas sociales: salario digno, sanidad y educación pública y de calidad.
- Nacionalización total de los grandes monopolios.
- Desmantelamiento inmediato de las bases militares norteamericanas, libertad de los presos políticos y disolución de las bandas paramilitares. Juicio y castigo a los responsables de la represión y la guerra sucia.

